

DIERK GOTSCHLICH

Fernando Peña, de 40 años y militante del Partido Republicano, fue nombrado director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) menos de una semana después del cobarde ataque de un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, en el cual una inspectora fue asesinada.

Ese episodio marcó el inicio de una ola de violencia escolar y amenazas de ataques similares, lo que ha llevado a múltiples suspensiones de clases en todo el país, y en todo tipo de establecimientos.

En medio de ese escenario, una de sus primeras a gestiones a cargo del servicio fue viajar hasta la comuna.

—¿Qué pudo constatar en ese viaje?

“Había una comunidad conternada, y esa sensación de vulnerabilidad se había extendido a todo Calama. Los acuerdos a los cuales llegamos con apoderados y alumnos consistían en emprender un retorno gradual a clases, pero siempre de la mano de iniciativas que les permitieran tener durante todo el año espacios de contención psicosocial. Lo va a liderar el colegio, pero va a tener el apoyo de varios sectores y servicios públicos”.

—¿Va a volver a la comuna para monitorear el avance de ese trabajo?

“Sí, es probable que durante los primeros días de mayo haya otra visita, principalmente para evaluar cómo se está realizando el retorno a clases. Cómo los cursos que se vieron afectados directamente van asimilando el retorno y, sobre todo, que los alumnos que presenten sintomatología de postrauma tengan la atención adecuada. Esa es la principal preocupación”.

—¿Y los profesores están preparados para volver a sus labores?

“Es una buena pregunta, porque lo que pudimos constatar es que la atención psicosocial de urgencia a los profesores luego de este evento no fue la adecuada. Por lo mismo, el compromiso que hicimos con el sostenedor fue de poder usar todos los espacios de contención psicosocial y de atención de urgencia para ayudar al equipo docente”.

—¿Por qué dice que esa atención no fue adecuada?

“Principalmente, porque la reacción de la mutualidad no fue la adecuada. Este fue un evento que como no tenía registro en la historia del sistema escolar, la mutualidad no tuvo la respuesta que esperaban los docentes. La atención fue baja, pero además no se solucionó con el pasar de los días”.

—¿Pero fue baja porque no estaban los profesionales o no tenían la capacidad operativa?

“No había capacidad. De hecho, de 140 profesores solo 52 recibieron primeros auxilios psicológicos; menos del 40%. Entonces eso obviamente que dificultó cualquier proyección de retorno a la normalidad, asumiendo el riesgo que había de exponer a profesores y a funcionarios que, obviamente, también tenían sintomatología postraumática y que no había sido atendida adecuadamente”.

—¿Cuál es su visión respecto a este escenario de violencia escolar generalizada?

“Hay varias causas; la principal creo que son las situaciones del en-

Fernando Peña asumió el cargo a inicios de mes, en medio de creciente violencia en colegios Nuevo director de Junaeb, tras visita a Calama: “Hay una tarea pendiente de proteger los espacios escolares”

El administrador público también acusa que investigaciones inconclusas, falta de presupuesto y desórdenes internos que dejó la administración anterior “nos demandan mucho tiempo”.



Fernando Peña fue asesor de Harald Beyer en su período como ministro de Educación.

“La administración anterior no dejó presupuesto para la compra de los computadores de las Becas TIC para los colegios particulares subvencionados. Es algo que tenemos que resolver”.

torno en donde muchos alumnos vulnerables conviven día a día, realidades sociales que son duras y de las cuales las escuelas no pueden escapar”.

“Anomía generalizada en la sociedad”

Sobre ese mismo tema, quien fue seremi de Educación del Biobío durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera enfatiza que “hay una tarea pendiente en proteger los espacios escolares de muchos entornos, donde el narcotráfico y la delincuencia no respetan la valoración social y cultural que debiese tener un espacio escolar”.

“Las escuelas debiesen ser templos y se debiesen cuidar como tal. Sin embargo, vemos que hay una cultura que no solo fomenta e incentiva la violencia, sino que muchas veces intenta relativizarla. A eso se suma la anomía generalizada que hay en la sociedad, una cultura muy instalada de no respeto a las normas, a las reglas y a la autoridad”, añade.

—Y en ese sentido, ¿qué le parecen las sanciones que se proponen mediante el proyecto de “Escuelas Protegidas”?

“Van en la línea correcta, pero además son dispositivos que van a ayudar a inhibir conductas que hasta ahora, por no tener sanción, muchas veces se expanden con facilidad. Entonces, es necesario que el sistema escolar también adecue su sistema de incentivos y del cumplimiento de reglamentos internos. Creo que es justo entender esto en un contexto mucho más amplio, porque si le sumamos el proyecto de Convivencia Escolar (ley 21.809), en

conjunto crean una política nacional del cuidado socioemocional”.

—¿Cómo aportará la Junaeb en este escenario?

“Para nosotros es todo un desafío ahora el implementar, en el marco de la Ley de Convivencia, este programa de bienestar socioemocional que la ley mandata a Junaeb, en conjunto con el Ministerio de Educación. Eso nos va a permitir ampliar y fortalecer nuestra participación como institución en los dispositivos de convivencia escolar y de apoyo psicosocial que ya durante muchos años hemos desarrollado”.

Investigaciones, falta de presupuesto y desórdenes internos

De profesión administrador público, Peña llegó a Junaeb luego de que a mediados de marzo el Gobierno le pidiera la renuncia a Camila Rubio, cuya gestión estuvo marcada por diversas controversias. Entre ellas, el retraso en la entrega de útiles escolares en 2024, un paro de manipuladoras de alimentos e irregularidades que detectó Contraloría al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Peña reconoce que, al asumir el servicio, se encontró con “cosas positivas y negativas”. Dentro de las primeras, destaca “la experiencia y capacidad instalada de muchos equipos profesionales”, y también que “a la fecha, tenemos un 99,66% de los útiles escolares entregados, que fue algo cuyo atraso generó molestia”.

—¿Y qué aspectos negativos halló?

“Lo principal, que la administración anterior no dejó presupuesto

para la compra de los computadores de las Becas TIC para los colegios particulares subvencionados. Es algo que tenemos que resolver, estamos pensando incluso en tocar puertas en otros servicios públicos para ver de qué manera lo podemos solucionar, pero es algo que sin duda va a generar preocupación y una justa molestia en aquellas familias que esperaban o tenían la expectativa de recibir ese equipo a mitad de año”.

“También la cantidad de requerimientos que hay de parte de la Contraloría, de investigaciones abiertas por procesos en los cuales se están investigando negligencias, en otros casos eventuales faltas a la probidad. Algunas son de público conocimiento, otras que estamos pesquizando, y que obviamente nos demandan mucho tiempo”.

Además, señala que “a nivel de régimen interno, dentro de lo negativo también está la falta de trazabilidad y de orden que hay en muchos procesos”.

“Vemos que hay una cultura que no solo fomenta e incentiva la violencia, sino que muchas veces intenta relativizarla”.

—En ese contexto, ¿qué evaluación hace de la anterior administración?

“Dentro de los hallazgos, por cierto que hay una responsabilidad de la jefatura, sin embargo, tampoco es mi intención quedarme en la responsabilidad o en las culpas. La verdad, siendo justos, hay problemas que en esta institución se acarrean hace muchos años. Por lo tanto, mi intención es avanzar y concentrarnos en las soluciones más que en los problemas”.